

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

Ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en antecedentes RIT O-2035-2023, comparecen Mariela Clara Medina Carrasco, Iris Nayem Perez Ramírez, Mariana Belén Rodríguez Soto y Rosa del Carmen Sandoval Peña y, en procedimiento de aplicación general, deducen demanda en contra de la Congregación Salesiana, entidad religiosa representada por Luis Patricio Alvarado Soto. Piden se declare la improcedencia de sus despidos, en consecuencia, se condene a la demandada a pagar las cantidades que indican por concepto de recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicios y a la devolución del aporte patronal al seguro de cesantía, más intereses, reajustes y costas.

Por sentencia de siete de febrero de dos mil veinticuatro, se acoge la demanda y, por consiguiente, se impone a la demandada el pago de las cifras que se señalan por los conceptos reclamados, con los acrecentamientos del caso y las costas.

En contra de dicha sentencia, la demandada interpone recurso de nulidad invocando las causales establecidas en la letra b) del artículo 478 y en el artículo 477, ambos del Código del Trabajo, el que fue declarado admisible e incorporado a tabla para su conocimiento y resolución.

**Considerando:**

**Primero:** En relación con la causal de ineficacia consistente en haber sido pronunciado la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica”, la recurrente apunta específicamente al principio de la razón suficiente.

Reitera que la teoría de su representada es ser un establecimiento educacional particular subvencionado regulado por la Ley de Inclusión Escolar. En consecuencia, es un colaborador del Estado en el servicio educativo. Dicha colaboración la hace en el marco de un régimen absolutamente regulado y sometido a una intensa supervigilancia de la Superintendencia de Educación y otras entidades relacionadas con el Ministerio de Educación. Así -expresa la recurrente- no se trata de un reproche a las conclusiones fácticas del juez, sino a la ausencia de medios



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VJMZXULLDPU

probatorios y, por ende, a una falta de apreciación conforme a la ley para sostener que sí concurren necesidades de la empresa en este caso concreto.

Sostiene que se encuentra plenamente acreditado un cambio en el mercado educacional a consecuencia de la Ley de Inclusión que obliga a los establecimientos educacionales a equilibrar sus ingresos y gastos, ya que de otra manera no pueden sostenerse en el tiempo. En efecto, es relevante mencionar que las instituciones educacionales subvencionadas conforme la ley que las regula, les impide poder aumentar sus ingresos, ya que, si bien el Estado paga una subvención por la asistencia de cada estudiante, el Colegio no puede aumentar la matrícula a su vez para incrementar dicha subvención. En otras palabras, los colegios subvencionados tienen prohibido aumentar la matrícula más allá de la que les permite el Ministerio de Educación.

Así -indica la reclamante- el sentenciador no contrastó pruebas para finalmente decidir por una de ellas, sino que concluye sobre la base de supuestos abstractos. De esta manera, no se trata de una mera apreciación errónea de parte del sentenciador, sino derechamente de la infracción de las reglas de la sana crítica. En efecto, el juez debe apreciar la prueba, para lo cual aplicará un criterio particular, privativo y subjetivo, cuyas conclusiones pueden estar en discordancia con la teoría del caso de una o de ambas partes, pero en el caso de marras, el sentenciador no logra el estándar de multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas para concluir que no hubo necesidades de la empresa.

Continúa arguyendo que, en el orden de la carga probatoria, por lo general, corresponde al empleador acreditar los hechos contenidos en la carta de despido. En este caso, se acreditó que el establecimiento educacional es particular subvencionado y que sólo subsiste con lo que el Estado le provee sin que sea posible que puede incrementar sus ingresos, aunque sus costos aumenten. El legislador precisamente se pone en el caso que, para justificar un razonamiento, el Juez “En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador”. De esta manera, el legislador no sólo exige en general que el sentenciador se apoye en más de una prueba, sino que éstas precisamente



deben ser más de una, deben ser graves, es decir, que sean de una entidad que naturalmente hagan razonable la convicción; que sean precisas, es decir, que no se presten naturalmente para un razonamiento en un sentido distinto al que obtiene el juez; que las pruebas sean concordantes, es decir, que entre las distintas pruebas exista una debida correspondencia que permitan al sentenciador mantener un razonamiento fluido y sin obstáculos, y esto sólo se da cuando cada prueba en su individualidad apoya el razonamiento en su totalidad; y finalmente que entre las pruebas que el juez informa para su convicción exista una conexión, esto es, que las pruebas digan relación con los hechos materia de la convicción judicial.

En el caso de marras -afirma la impugnante- el juez de ninguna manera ha cumplido con las obligaciones impuestas por el legislador. La misma norma ya citada le exige al juez que debe expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. Es decir, a juicio de su parte, la infracción de las reglas de la sana crítica se produce al momento en que la juez sólo se hace cargo de una prueba en forma aislada para ponderar su alcance y no en la conclusión misma, ya que esta no está suficientemente razonada, sino que en concluir en dirección contraria a lo que naturalmente emanaban de las mismas pruebas.

Reitera que el establecimiento educacional es subvencionado, de modo que tiene como ingresos las subvenciones fiscales, sean éstas, la general y otras focalizadas, tales como la SEP. Agrega que por Ley sólo el financiamiento de la subvención general es posible destinarlo al pago de remuneraciones y los gastos generales de manutención del Establecimiento. Así, conforme la Ley 20.845 de Inclusión Laboral, los sostenedores educacionales tienen el carácter de colaboradores del Estado en la función educativa. Esto quiere decir que son responsables de la continuidad educativa de los alumnos y, además, deben hacerlo financiados únicamente con la subvención fiscal, y en cuanto a gastos ordinarios mensuales, sólo con la subvención general. Esta situación obliga a los sostenedores a optimizar el gasto de los recursos, más aún cuando en el caso del Establecimiento demandado no existe el financiamiento compartido, esto es, que los padres y apoderados no pagan nada como colegiatura o copago. Destaca que el



establecimiento atiende a la población en edad escolar vulnerable de Santiago.

Se exploya sobre los objetivos centrales de la Ley 20.845, releva que el Establecimiento como ente colaborador del Estado, debe rendir cuenta anual de lo que percibe por subvención, de modo que los gastos deben ser sólo en directo apoyo de la continuidad del proceso educativo, por lo que tiene un ingreso acotado y limitado, y con ellos debe cumplir con su rol educador y, a la vez, como receptor de financiamiento fiscal. Por lo tanto, si el Establecimiento incurre en mayores costos de mantención o tiene gastos superiores, simplemente se desfinancia y si con ello no puede cumplir su rol de educador, el Estado procede a revocar su calidad de sostenedor.

Indica que se materializa la infracción al principio de la razón suficiente, porque la sentenciadora no logra apreciar las declaraciones juradas de ingresos, que corresponden a documentos obligatorios que deben presentar los establecimientos educacionales subvencionados al Ministerio de Educación, precisamente para demostrar sus ingresos y gastos anuales, y cómo pueden financiarse con las subvenciones estatales. Precisamente la ley obliga a los colegios a otorgar becas y a considerar alumnos prioritarios, los cuales no realizan ningún tipo de copago.

Argumenta que, por lo anterior, el ajuste en horas docentes (no necesariamente en reemplazo) dice relación con la carga curricular y horas contratadas, que, con el número de docentes, cuestión que la sentenciadora ni siquiera consideró. En efecto, las pruebas se deben apreciar según el contexto de las necesidades de la empresa, pero en cuanto al “mercado relevante” del empleador. En este caso, el mercado es la enseñanza escolar particular subvencionada. Es por ello que la sentenciadora infringe el principio de la razón suficiente, porque los supuestos en los que basa su criterio sobre los requisitos de la causal de necesidad de la empresa, no se condicen con la realidad de un colegio particular subvencionado. En definitiva, la cuestión a probar es si el ajuste en la carga horaria corresponde a “necesidades de la empresa” en un colegio particular subvencionado, debiendo basarse en la realidad legal y laboral de un colegio particular subvencionado.

Por lo tanto, los modelos y patrones que usualmente se aplican a las empresas con fines de lucro, en nada son asimilables respecto de un colegio



particular subvencionado. Las declaraciones juradas de ingresos anuales, no se asimilan a un estado financiero ni a un balance, sino que corresponde a la realidad financiera de un establecimiento cuyas subvenciones son prácticamente insuficientes para sufragar los gastos generales, y se debe recurrir a la optimización de toda cifra para hacer viable un proyecto educativo. En este orden de cosas, la sentenciadora omite que un establecimiento educacional subvencionado está regulado y supervisado, y que su financiamiento no depende de un mayor o menor grado de productividad, sino que, de la asistencia de alumnos, con el factor que la matrícula no se puede aumentar.

En cuanto a la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo argumenta que la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica obliga a su representada a soportar el pago de prestaciones laborales a las que la trabajadora no tiene derecho.

**En subsidio**, invoca la causal establecida en el artículo 477, inciso primero, del Código del Trabajo, esto es, infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en cuanto se ordena la restitución del aporte efectuado por el empleador en la Administradora de Fondos de Cesantía en la cuenta del actor.

Precisa que la vulneración se configura por una errada interpretación de la norma que es la aplicable al caso, esto es, el artículo 13 de la Ley N° 19.728, el que reproduce.

Aduce que la Ley 19.728, que establece un Seguro de Desempleo, permite la devolución de las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad deducidos los costos de administración que correspondan cuando se invoca la causal de necesidades de la empresa.

Ello porque: (i) Que el despido por necesidades de la empresa sea considerado improcedente, no implica una mutación de la causal del término del contrato de trabajo. Es el legislador quien autoriza expresamente al empleador a imputar al pago de la indemnización por años de servicio, la suma de dinero correspondiente a lo aportado por el empleador en la cuenta individual del trabajador del seguro de cesantía durante el periodo que estuvo vigente el contrato de trabajo indefinido.



La norma infringida no distingue respecto de la calificación del despido, sino que sólo hace referencia a la causal de término de la relación laboral y las indemnizaciones legales correspondientes. Es así como, aun cuando se estime que el despido del actor es de carácter injustificado, dicha declaración no modifica ni hace mutar la causal invocada, es decir, seguirá siendo la prescrita en el artículo 161, inciso primero, del Código de Trabajo. Únicamente trae como sanción aparejada el recargo legal del 30% por sobre la indemnización por años de servicios del trabajador.

Señala que, de seguir el argumento de la Sentenciadora, más allá de que el despido por necesidades de la empresa se califique como injustificado, implicaría necesariamente modificar la causal legal de despido del actor, estableciéndose de facto una nueva sanción que no está prescrita para aquellos despidos fundados en dicha causal. Es decir, significa sancionar al empleador de una forma no prevista por el legislador, privándolo de un derecho que expresamente ha sido establecido en su favor.

Continúa argumentando que, en el sentido expuesto, el legislador, en parte alguna del ordenamiento jurídico, estableció que en caso de declararse injustificado el despido por la causal necesidades de la empresa, el empleador no podría descontar el aporte realizado conforme a la normativa antes referida, y por ello no es posible interpretar que, de declararse injustificado, ya que ello no tendría sustento jurídico con el cual fundamentarse.

Enseguida, reproduce los fundamentos del fallo y señala que el criterio sustentado por la juez únicamente bascula en un supuesto “beneficio” del empleador al ejercer el derecho de imputar al pago de la indemnización por años de servicio el aporte efectuado en la cuenta de cesantía del actor. No discurre dónde estaría radicado el “beneficio” del empleador, que, pagando la indemnización por años de servicio, descuenta lo que a su vez fue aportando a la cuenta del trabajador. En efecto, el trabajador no ve menoscabada ni su indemnización ni el subsidio a que tiene derecho.

Insiste en la correcta interpretación, alude a la exégesis del asunto en fallos de los tribunales superiores, reproduce jurisprudencia y concluye manifestando que el vicio reclamado tiene influencia substancial en lo dispositivo del fallo que se impugna, pues con la errónea aplicación e



interpretación que la sentenciadora hace de la norma legal citada, priva a su representada de su derecho a imputar de la indemnización por años de servicio que corresponde al trabajador, el aporte efectuado por ésta en su cuenta personal, obligándola en definitiva a un doble pago por el mismo concepto. Asimismo, constituye para el trabajador un enriquecimiento sin causa, ya que estará percibiendo el doble de lo que legalmente le corresponde sin que exista una norma legal que lo ampare.

Si la sentenciadora hubiera interpretado correctamente la norma, es decir, que si se invoca la causal de necesidades de la empresa y ésta conlleva el pago de una indemnización por años de servicio, habría permitido que su representada pudiera descontar válidamente de esta última indemnización el aporte efectuado a su cargo en la cuenta de cesantía del trabajador.

Pide (en la parte que interpone el arbitrio para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que existe duplicidad de petitorio) declarar nula la sentencia recurrida en lo pedido por su parte y dictar sentencia de reemplazo, la cual acogiendo las causales de nulidad invocadas, o en uso de las facultades de oficio, rechace la demanda en cuanto declara el despido de los actores como injustificado y, en subsidio, declare procedente el descuento del aporte del empleador en la Administradora de Fondos de Cesantía, con costas del recurso.

**Segundo:** Para los efectos pretendidos, es dable tener presente los sustentos de la decisión adoptada, contenidos en el motivo quinto, en el que, enseguida de reproducir la carta de despido, se razona: *“A juicio de esta sentenciadora, las comunicaciones de despido no cumplen con el requisito de especificidad y pormenorización que debieran tener. En efecto, se habla de un proceso de racionalización en la distribución de la carga horaria, pero nada se indica del por qué de este proceso y la necesidad que había de efectuarlo; tampoco se sabe en qué consiste el señalado proceso ni qué lo motivó, limitándose la demandada a señalar que se intenta adecuar todas las horas disponibles considerando el número de docentes, pero la expresión utilizada es demasiado vaga y genérica y no permite saber en qué consiste dicha adecuación. Luego se habla de las consecuencias, esto es, que las horas de las docentes serían distribuidas para optimizar el costo de la hora*



*docente. Pero nada se indica respecto de las razones reales por las que era necesaria la desvinculación de las actoras, ni menos aún las necesidades de la empresa para proceder a ello.*

*Las alegaciones de que el establecimiento educacional estaba pasando a un proceso de gratuidad recién vino a ser introducida en el presente juicio por los testigos de la demandada; ni siquiera en la contestación de la demanda se habla de ello, sino que se habla, también genéricamente, de un proceso de adecuación y racionalización, de la ley de inclusión escolar, entre otras alegaciones generales, que tampoco permiten establecer primero los hechos de las cartas de despido que, dicho sea de paso, debieron ser contenidos en ellas y segundo, menos aún, la efectividad de los hechos escuetamente mencionados.*

*Agrega la juzgadora: “A mayor abundamiento, los testigos aportados por la demandada indicaron que se reorganizaron las horas docentes de los profesores, pero el testigo Hugo Campos indicó que las docentes demandantes fueron reemplazadas en sus funciones, por lo cual no consta que la demandada se haya encontrado en la necesidad indicada en la causal de término de los contratos para el despido de las trabajadoras. Asimismo, el testigo Gabriel Araya indicó que no se suprimió ningún curso, por lo cual resulta lógico que el número de horas de clases no disminuyó, así como tampoco la demanda de horas para cubrir el proceso educacional de los alumnos.*

*Las declaraciones de Ingresos Proyectados año escolar 2023 y 2022 del Colegio El Patrocinio de San José, tampoco permiten tener por acreditada la causal de despido, primeramente pues, como ya se indicó, los hechos de la carta son tan genéricos que dificulta el análisis de las probanzas rendidas, ya que no se sabe qué pretenden probar. Sin perjuicio de ello, estos documentos son tan vagos e inentendibles, pues su título solamente indica “Formulario de declaración de ingresos efectivos año escolar 2022” y el mismo título se da para el documento del año 2023; los ítems de ingreso se encuentran en filas y columnas que se encuentran corridas entre sí, es decir, no se sabe qué ítem corresponden; asimismo, se lee una cifra, de la cual se desconoce si indica un monto en pesos, dólares o alguna otra unidad monetaria; luego se lee el título “Suma de las exenciones del período*





*(Aplicación del sistema de becas), con una cifra que, nuevamente se desconoce a qué corresponde. Por ello, dada la vaguedad de estos documentos, en nada sirven para acreditar la necesidad invocada por la demandada.*

*La prueba confesional en nada aporta a acreditar la causal de despido, toda vez que se consultó a las demandantes por sus cargos y las horas que prestaban servicios, no encontrándose discutido lo primero y lo segundo, no se relaciona con los hechos genéricos de las cartas de desvinculación.*

*La restante documental no dice relación con la acreditación de la causal.*

*Así, no cumpliendo las cartas de despido el requisito de especificidad y claridad que deben tener y tampoco habiéndose probado los hechos genéricos y vagos contenidos en ellas, se acogerá la acción de despido improcedente, condenándose a la demandada al pago de recargo legal sobre la indemnización por años de servicios, la que no se encuentra discutida.”.*

**Tercero:** Como se advierte del motivo reproducido, la razón por la que la sentenciadora acogió la demanda está dada, principalmente, porque “las comunicaciones de despido no cumplen con el requisito de especificidad y pormenorización que debieran tener” y sobre tal aspecto ningún reproche se lee en el arbitrio que se examina. Únicamente a mayor abundamiento se analiza la prueba rendida, tratando de enfocar el análisis hacia los presupuestos vagos y genéricos hechos valer por la empleadora, de modo que aún cuando dicho análisis pudiera considerarse transgresor de algún principio de la lógica, nada distinto es posible decidir.

Valga sí anotar que el examen realizado por la juzgadora se enmarca en las reglas que gobiernan la ponderación de los elementos de convicción en la materia. En otros términos, brinda las razones por las que cada medio de prueba conduce o no a establecer los hechos requeridos para el juzgamiento en uno u otro sentido.

**Cuarto:** En cuanto a la infracción de ley, ha de tenerse presente que el artículo 13 de la Ley N° 19.728, expresa que “Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...” Y el inciso



segundo indica que “se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...”.

Como se observa, dicho precepto contiene un beneficio a favor del empleador que le permite rebajar el monto que efectivamente debe desembolsar para el pago de las indemnizaciones que obligatoriamente debe enterar, a través del descuento o compensación de las sumas que aportó para el seguro de cesantía; herramienta que encuentra su fundamento en la intención legislativa de facilitar el pago de dichos estipendios en el contexto de la finalidad de la Ley 19.728, cuyo objeto es atenuar los efectos de la cesantía y de la inestabilidad en el empleo mediante un sistema de ahorro obligatorio que opera, en el fondo, como un seguro que garantiza un resarcimiento a todo evento, desde que se acciona con la sola presentación por parte del trabajador de los antecedentes que den cuenta de su despido.

De esta manera, se logra equilibrar los intereses del dependiente con las necesidades de los empleadores, especialmente aquellos que conforman la micro, pequeña y mediana empresa, para que en períodos de dificultad con la subsistencia de estas -contexto que configura y autoriza el despido por las causales del artículo 161 del Código del Trabajo- cuenten con un auxilio que facilite el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

**Quinto:** En razón de lo expuesto, la procedencia del descuento que previene el citado artículo 13 requiere no sólo que el contrato de trabajo haya terminado formalmente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, sino que dicho motivo haya sido validado judicialmente en caso de impugnarse su justificación, pues de otro modo, no se satisface la *ratio legis* que fundamenta la consagración del instituto en cuestión, desvirtuándose con ello la intención que se tuvo en consideración para la dictación de la norma que se analiza.

**Sexto:** De tal manera y como acontece en estos antecedentes, si existe una decisión jurisdiccional que con autoridad de cosa juzgada declara injustificado el despido por necesidades de la empresa, el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728 queda desprovisto de fundamento fáctico que lo haga aplicable y, por lo tanto, no se solventa la condición legal para que opere, desde que el despido resulta, en definitiva, carente de la justificación que exige el artículo 13 ya mencionado.



Comprender dicha norma de modo diverso, implicaría un apoyo al actuar injustificado del empleador, constituyendo un incentivo perverso para que, a fin de obtener el beneficio descrito, invoque una causal errada validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido indebido, debido a una causal impropia, producirá efectos que benefician a quien lo practica, a pesar de que la sentencia declare la causal improcedente e injustificada.

**Séptimo:** En consecuencia, de lo antes razonado debe necesariamente concluirse que la correcta interpretación de la norma en estudio implica que la declaración de un despido improcedente por la causal de necesidades de la empresa priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley 19.728. A lo anterior cabe agregar que, si la causal fue declarada improcedente, siendo la imputación válida, de acuerdo con esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Mal podría entonces validarse la imputación a la indemnización si lo que justifica ese efecto ha sido declarado improcedente.

**Octavo:** En tal circunstancia, acierta la sentenciadora al acoger este acápite de la demanda, accediendo a la restitución de los fondos señalados en un caso en que se comprobó la inconcurrencia de los supuestos del artículo 161 del Código del Trabajo como justificación del despido de que fueron objeto las demandantes, motivo por el que no se ha configurado la infracción de ley acusada por la demandada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la sentencia de siete de febrero de dos mil veinticuatro, pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en antecedentes RIT O-2035-2023, caratulados “Medina y otros / Congregación Salesiana Inspectoría Salesiana”.

Acordado, en lo que se refiere a la improcedencia del descuento del seguro de cesantía, con el voto en contra de la Fiscal Judicial, Javiera González S., quien estuvo por acoger el presente recurso sobre la base de las siguientes consideraciones:



1°) Que, sobre el tema discutido ha de tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley N° 19.728, el financiamiento del seguro es tripartito y lo cotizado por los trabajadores con contrato indefinido se abona a la cuenta individual por cesantía conjuntamente con el aporte del empleador ascendente a un 2.4%. El fondo de cesantía solidario se financia también con la contribución del Estado y su finalidad es solventar prestaciones básicas cuando los recursos de la cuenta individual no son suficientes.

2°) Que, por otra parte, el artículo 13 de la Ley N° 19.728 dispone que, si el contrato terminare por alguna de las causales previstas en el artículo 161 del Estatuto Laboral, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicio regulada en el derecho del trabajo común, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior. En su inciso segundo prevé: “se imputará a esta prestación la parte del Saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15”.

3°) Que en el Mensaje con que S.E., el Presidente de la República, envió el Proyecto de Ley N° 19.728 al Congreso Nacional, en su oportunidad, se señala que la iniciativa se enmarca en el profundo proceso de cambios que experimenta el trabajo en el mundo, una nueva realidad que lleva a una creciente competencia y que “genera una mayor movilidad relativa en el empleo”, buscando “facilitar que trabajadores y empleadores puedan enfrentar estas nuevas condiciones entregándoles mayor protección, particularmente a aquellos sectores más vulnerables de la fuerza de trabajo”. Así también se establecen como criterios básicos orientadores del proyecto de ley, los relativos a una mayor protección social, la mantención de niveles de ingresos durante el período de cesantía, la experiencia comparada para evitar las distorsiones que suelen ocurrir con motivo de los seguros tradicionales, combinación de un ahorro individual obligatorio con un Fondo Solidario, este último financiado con una parte de la cotización del empleador y con aporte estatal y la posibilidad de imputar los fondos de la cuenta individual que sean de cargo del empleador a la indemnización por años de



servicios que éste puede verse obligado a pagar, facilitándole así tal obligación.

En fin, conforme a la historia fidedigna del establecimiento de la ley la finalidad del denominado seguro de desempleo ha sido alcanzar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de un trabajador cesante en el evento que el motivo del término de la relación laboral no otorgue derecho a indemnización y la carga económica que puede eventualmente representar para un empleador el hecho del despido, cuando la razón del cese de los servicios lleva aparejada necesariamente indemnización, cuyo es el caso de la desvinculación por necesidades de la empresa en que lo único que pudiera discutirse sería la procedencia o no del recargo legal. Así, tratándose de causales de despido que en conformidad a la ley no dan derecho a indemnización por años de servicio, el seguro de cesantía actúa como una suerte de resarcimiento a todo evento, cuestión que no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico laboral, ya que, tratándose de ciertos trabajadores esa indemnización procede siempre, independiente del motivo del término de la relación laboral –renuncia o despido. Pero en los otros casos, esto es, cuando el término de la relación laboral da derecho a esa indemnización, el régimen contemplado en la Ley N° 19.728 mantiene subsistente esa responsabilidad directa del empleador, en el sentido que debe pagar la indemnización legal que corresponde.

4°) Que, por consiguiente, es el legislador -sin hacer diferencia alguna- quien autoriza expresamente al empleador a imputar al pago de la indemnización por años de servicio el 2,4% pagado durante el período en que estuvo vigente el contrato de trabajo indefinido. Se busca asegurar la solución efectiva de ese beneficio, mediante una parte de la cuenta individual de cesantía que se complementa con el total del resarcimiento por antigüedad.

5°) Que la disposición referida no establece más limitaciones que aquellas que hacen procedente el beneficio, de manera que no es condición para que el empleador pague la indemnización por antigüedad en la forma dispuesta por el artículo 13 de la Ley N° 19.728, que la decisión de finiquitar el trabajador, por la causal de necesidades de la empresa, sea aceptada por el dependiente o sea declarada como efectiva posteriormente por un tribunal.



Tal conclusión encuentra corroboración en la norma del artículo 52 del mismo texto legal, en que luego de reconocer el derecho del trabajador a disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, si éste ha accionado por despido injustificado, indebido o improcedente, o por despido indirecto conforme al artículo 171 del Código del Trabajo, agrega que “Si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13”.

Por último, resulta útil recordar que la institución de que se trata ha sido concebida por el propio legislador como un “seguro” obligatorio de cesantía, es decir, a cambio de cobrar una prima –aporte patronal, en la especie- la entidad aseguradora –Administradora de Fondos de Cesantía- se obliga, en caso de que se produzca el siniestro cubierto –desvinculación del trabajador- a satisfacer la prestación convenida –solucionar al dependiente una prestación por cesantía-. Aunque, en el caso y por expresa disposición de ley, no se permite al verdaderamente obligado al pago de la indemnización por años de servicios -compensación con la que se hace equivalente el seguro en cuestión, según lo expresa el artículo 54 de la Ley N° 19.728- el pacto, sea por la vía individual o colectiva, de una reducción del monto de dicha indemnización, surgiendo, en consecuencia, el seguro regulado por ley como un modo de facilitar el cumplimiento de ese pago.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Fiscal Judicial, Javiera González S.

N° 656-2024.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VJMZXULLDPU

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Lilian A. Leyton V. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VJMZXULLDPU